

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN procede a resolver el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **DORA ELENA GÓMEZ CORRALES** contra la sociedad **CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** (en adelante CIVING INGENIEROS S.A.S.), tramitado bajo el radicado único nacional No. 05001-31-05-019-2019-00560-01.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES:

La actora pretende con la presente demanda, se declare que el contrato de trabajo de obra o labor suscrito con la demandada, finalizó sin justa causa, y que como consecuencia de ello se condene a esta al reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa debidamente indexado, lo que resulte probado ultra y extra petita y costas procesales.

Como fundamentos fácticos de las pretensiones, en lo que interesa para resolver a esta instancia, expone la accionante que el 19 de noviembre de 2018 suscribió contrato de obra o labor con la empresa CIVING INGENIEROS S.A.S., desempeñando el cargo de directora de interventoría para atender los asuntos relacionados con el contrato No.C-6700003633-2018, cuyo objeto era la construcción de la piscina semiolímpica de la Unidad Deportiva la Floresta y del edificio administrativo operativo y técnico, ubicado en la comuna 12, administrado por el INDER Medellín, pactándose como salario mensual la suma de \$3'500.000.

Señala que, el 2 de marzo de 2019, recibió comunicación por parte la entidad accionada informándole la suspensión del contrato de obra, a partir del 4 de marzo de 2019, por haberse presentado suspensión en el contrato No.C-6700003633-2018, indicando el empleador que el contrato se reanudaría una vez el contratante lo ordene, esperando contar con ella, una vez se reinicie el proyecto.

Aduce que, posteriormente el 30 de marzo del citado año, la entidad accionada le hizo entrega de la liquidación de las prestaciones sociales, motivando el retiro en la suspensión del contrato.

Relata que, de acuerdo con el acta de reinicio expedida por el INDER, el contrato fue reiniciado el 10 de mayo de 2019, sin haber sido requerida por la empresa para reiniciar labores, no obstante, le fue entregada una carta para el retiro de las cesantías, documento del que se desprendía que la terminación del contrato ocurrió el 2 de marzo de 2019.

Manifiesta que elevó derecho de petición el 28 de junio de 2018, solicitó al representante legal de la entidad accionada, el esclarecimiento de la terminación del contrato de trabajo, y consecuentemente el pago de la indemnización por despido sin justa causa, dando respuesta la entidad accionada indicando que el contrato había finiquitado cuando se suspendió la obra.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de la primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda, declarando que el contrato de trabajo celebrado entre la demandante y la sociedad accionada, fue terminado en forma unilateral y sin justa causa por parte de la demandada, razón por la cual condenó a la sociedad CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. a reconocer y pagar a la demandante DORA ELENA GÓMEZ CORRALES, la suma indexada de \$6.883.333 por concepto de indemnización por despido sin justa causa. Costas a cargo de la entidad accionada.

Para fulminar la condena, el fallador de primera instancia argumentó, que no estaba en discusión el tipo de vínculo que existió entre las partes, esto es obra o labor contratada, encontrándose básicamente en discusión, si se estaba en presencia de

la terminación de la obra o labor contratada, o si, por el contrario, se estaba frente a una decisión unilateral del empleador.

Trayendo a colación el contrato de trabajo suscrito entre las partes, que en su cláusula quinta alude al término del mismo, indicando que iniciaba el 19 de noviembre de 2018, con terminación cuando se suspendiera o terminara la obra en la cual se encontraba vinculada, el contrato de trabajo podía finalizar con la suspensión del contrato de interventoría, sin embargo, cuando se suspendió el contrato de la actora en escrito del 2 de marzo de 2019, este no le fue terminado, tan solo le informó que fue suspendido como se acredita con la prueba.

Luego, en mayo de 2019, se le entregó a la actora la liquidación del contrato, y se le indicó que el vínculo laboral había terminado desde marzo de 2019, lo que implicaba una terminación de contrato retroactiva, encontrando con ello un actuar indebido por parte de la demandada, pues si bien la terminación del contrato de trabajo no resultaba ilegal, ya que el mismo podía finalizar por suspensión de la interventoría, lo que ocurrió mal fue el trámite, ya la accionada equiparó erradamente el concepto de suspensión y de terminación.

También adujo el *a quo*, que la entidad accionada con el interrogatorio de parte rendido por la representante legal y la prueba testimonial allegada por la accionada, el contrato de interventoría que tenía la accionada se había suspendido en razón de una inhabilidad que tuvo la empresa para contratar, comunicándosele la inhabilidad en enero de 2019, desvirtuándose esta afirmación, por no resultar lógica, ya que según el testigo, una vez se les notifica de la inhabilidad a la empresa, se da la suspensión del contrato, sin embargo, tan solo hasta el 4 de marzo de 2019 se suspende el contrato y aun estando la empresa inmersa en la supuesta inhabilidad, se reanuda el contrato en mayo de 2019, no acogiendo este argumento el juez.

Por lo anterior, concluyó el juez de primera instancia, que el contrato de obra o labor suscrito por la demandante había finalizado sin justa causa, ordenando el pago de la indemnización liquidándola desde el momento del reinicio de la interventoría, que, según el acta aportada en el litigio, fue el 10 de mayo de 2019, hasta el 8 de julio del mismo año, teniendo en cuenta para la liquidación el salario de \$3.500.000 de la actora que no fue objeto de debate.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la demandante interpone el recurso de apelación parcial, manifestado que es importante determinar que de acuerdo al artículo 64 del CST el valor de la indemnización en los contratos de obra, corresponde a los salarios dejados de percibir desde el momento de la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la terminación de la obra, siendo importante determinar que este contrato de interventoría no terminó el 8 de julio de 2019, como lo indicó el despacho, sino que se terminó el día 6 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que se puso en conocimiento al despacho la relación de contratos publicada en la página oficial del INDER www.inder.gov.co, donde se informa y ratifica que la terminación fue el 6 de noviembre de 2019, así que el juez en aras de buscar la justicia material tuvo el deber de consultarlos como se le solicitó en el decreto de prueba, para que determinará la fecha real de terminación, por lo cual solicitó al Tribunal, que revoque la decisión parcialmente, y condene a la indemnización de despido sin justa causa hasta el 6 de noviembre de 2019.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente la apoderada de la demandante allegó escrito de alegatos de conclusión, en el cual manifestó resumidamente que, en el desarrollo del proceso, y de acuerdo con la carga de la prueba, la demandante logra demostrar que el contrato se terminó y por ende es la parte demandada la que debía demostrar que la terminación del contrato surgió por una justa causa o por la real expiración del contrato de obra o labor determinada, circunstancia que no fue demostrada en el proceso, toda vez que es clara la prueba documental y la intención de la demandada en suspender el contrato de trabajo, más aún cuando la situación que generó la suspensión fue la inhabilidad de contratar con el Estado, tal y como lo indicó la Representante Legal de Civing ingenieros S.A.S en el interrogatorio de parte sucedió en el año 2019 y el testigo Stephan Iván Vallejo Pachón al indicar que la inhabilidad le sobrevino a la empresa en el mes de enero del año 2019 y que fue esta situación la que hizo suspender el contrato, pues la empresa se encontraba en imposibilidad de continuar con el mismo.

Por tal razón, es claro que la terminación del contrato de trabajo no se generó una situación objetiva, como lo es la terminación de la obra o labor determinada o por una situación ajena a la demandada, toda vez que la razón por la cual, reitero, se suspendió la obra fue por la imposibilidad de continuarla por la inhabilidad que le sobrevino a la demandada, por lo cual, le asiste el derecho a que se le reconozca una indemnización por despido sin justa causa por no haber logrado demostrar la demandada las razones de la terminación del contrato de trabajo.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por el artículo 64 del C.S.T el valor de la indemnización en los contratos de obra corresponde a los salarios dejados de percibir hasta la terminación de la obra o labor, en razón al despido.

Dentro del expediente se logra demostrar que el salario de mi poderdante equivalía a \$3.500.000,00, y que de la página oficial del INDER, en el link www.inder.gov.co en la relación de los contratos, se encontraba disponible el documento de contrato de obra C-6700003633-2018, documento público y de fácil acceso sobre el cual se puso en conocimiento del juzgado diecinueve laboral del circuito de Medellín quien tuvo el deber de consultarlo como se le solicitó en el decreto de pruebas oficial al INDER para que determinara la fecha real de terminación de la obra; aquí se observa claramente que ese contrato de interventoría tuvo terminación el 06 de noviembre de 2019.

Es por lo anterior y en aras de la justicia material, teniendo presente el documento anteriormente mencionado y la real evasión por parte de la representante legal de Civing Ingenieros Contratistas S.A.S de responder a las preguntas formuladas en el interrogatorio de parte que se le formuló en audiencia, la indemnización por despido sin justa causa debió liquidarse desde el 04 de marzo del año 2019, fecha en la cual suspendieron el contrato de trabajo a mi poderdante hasta el día 06 de noviembre de 2019 fecha de la real terminación del contrato de obra C-6700003633-2018 y no al 08 de julio de 2019 como lo indica el despacho.

Por estas consideraciones, solicito REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia emitida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 28 de junio de 2021 en razón a la suma de dinero reconocida por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en esta instancia, se circunscribe a establecer cuál es el extremo final del contrato de obra o labor suscrito por las partes, en aras de establecer si la suma liquidada por el *a quo*, por concepto de indemnización por despido sin justa causa, se encuentra ajustada a derecho o si resulta inferior a la que debió de ser reconocida a la actora.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes:

6. CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*

Sea lo primero señalar que, en el caso en estudio, no es motivo de discusión la existencia de la relación laboral mediante un contrato de obra o labor determinada que se dio entre la actora y la sociedad demandada, ostentando la demandante el cargo de directora de interventoría de la obra No. C-6700003633-2018, devengando un salario mensual de \$3.500.000.

Tampoco es objeto de debate, que la relación laboral inició el 18 de noviembre de 2018, terminando el contrato por decisión unilateral y sin justa causa por parte de la sociedad empleadora, pues así lo declaró el juez de primera instancia, sin que este punto haya sido motivo de controversia en el recurso de alzada.

Radica la inconformidad de la apelante únicamente en el extremo final del contrato, es decir, la fecha en que tuvo en cuenta el juez para liquidar la indemnización por despido sin justa causa (8 de julio de 2019), pues considera la recurrente que la fecha final de la obra data del 6 de noviembre de 2019, situación que tiene incidencia en el quantum de la indemnización.

Teniendo en cuenta que el contrato suscrito por las partes, como se dijo en precedencia es el denominado de obra o labor, tenemos que el inciso 3 del artículo 64 del CST, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, establece frente a este tipo de contrato la tarifa de la indemnización, señalando lo siguiente:

“En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.”

Conforme a la norma antes citada, ante la terminación unilateral del contrato de trabajo a término fijo por la duración de la obra o la labor contratada sin justa causa, la indemnización a cancelar al trabajador debe ser del equivalente al valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltaba para finalizar la obra o labor para la cual fue contratado el trabajador.

En el caso de la demandante, la Sala procede a analizar la prueba que milita en la foliatura, encontrándonos a folios 20 y 21 (archivo 01DemandaAnexos) el contrato de trabajo de obra o labor suscrito entre las partes, documento del que se lee en la cláusula segunda las funciones de la demandante, así:

*“...SEGUNDA: Funciones. **EL EMPLEADOR contrata un (a) DIRECTOR de INTERVENTORIA, para desempeñar funciones propias de su cargo o de la naturaleza del mismo o aquellas relacionadas y designadas por el representante legal, PARA ATENDER LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL GIRO ORDINARIO DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S.; y puntualmente una dedicación del 100% en el Contrato puntualmente una dedicación del 100% en el Contrato C-6700003633-2018, cuya objeto es INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA JURÍDICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA FLORESTA, Y DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y TÉCNICO RESPECTIVO, UBICADA EN LA COMUNA 12, ADMINISTRADA POR EL INDER DE MEDELLÍN...**”*

Acto seguido, en la cláusula QUINTA del citado contrato se pactó como duración, lo siguiente:

*“...El presente contrato **tendrá una duración desde el día DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2018 hasta cuando se finalice o suspenda la obra en la cual se encuentra vinculado, pero podrá darse por terminado cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto...**”*

El contrato de trabajo le fue suspendido a la accionante a partir del 4 de marzo del citado año, mediante comunicación del 2 de marzo de 2019, indicando el empleador que ello se daba a raíz de que la obra en el contrato No. **C-6700003633-2018**, a la que había sido asignada, fue suspendida a partir de la fecha y hasta tanto la entidad ordene la reanudación del contrato, encontrándose en la foliatura que el citado contrato No. C-6700003633-2018, fue reanudado mediante acta del 10 de mayo de 2018 (Fls. 23 y 24 del archivo 01DemandaAnexos), documento del que se infiere que el plazo inicial del citado acuerdo era del 19 de noviembre de 2018 hasta el 4 de mayo de 2019, suspendiéndose el 06 de marzo de 2019, siendo reiniciado el 10 de mayo del mismo año, estipulándose como fecha de terminación el día 08 de julio de 2019.

Así que, teniendo en cuenta que a la demandante se le suspendió la vinculación laboral a partir del 4 de marzo de 2019, sin que luego de la reanudación del contrato No. C-6700003633-2018, se le haya reanudado su relación laboral con la accionada, efectivamente le asiste derecho al pago de la indemnización por el término que fue reanudado el mismo, esto es del 10 de mayo al 8 de julio de 2019, que corresponde a 58 días, como de manera acertada lo indicó el *a quo*, pues de la citada cláusula quinta del contrato individual del trabajo de obra o labor suscrito entre los sujetos procesales, se desprende que el contrato tendría una duración hasta **cuando se finalice** o suspenda la obra en la cual se encuentra vinculado, desprendiéndose de la citada acta de reanudación que la fecha de finalización, era el día **08 de julio de 2019**.

Y si bien, la recurrente pregonó que el contrato No. **C-6700003633-2018**, cuyo objeto era **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DE LA JURÍDICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA FLORESTA, Y DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y TÉCNICO RESPECTIVO, UBICADA EN LA COMUNA 12, ADMINISTRADA POR EL INDER DE MEDELLÍN**, finalizó el 6 de noviembre de 2019, siendo esta la fecha que pretendía que se tuviera en cuenta para liquidar la indemnización por despido

sin justa causa, estima esta colegiatura que respecto a este plazo no hay prueba que nos permita determinar con precisión que ello obedeció a la realidad del contrato.

Ahora, en la audiencia consagrada en el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S , en la etapa de decreto de pruebas la abogada de la demandante solicitó se decretara de oficio la citada prueba de consulta a la página web del INDER, sin que el juez de conocimiento haya accedido a este requerimiento, poniendo en traslado esta decisión, sin que la interesada hubiese en su momento recurrido la decisión, lo que demostraba un desinterés de su parte, frente a esta prueba que según ella era trascendental para el litigio.

Pero es más, si tal prueba hubiese sido decretada, la recurrente indica que el contrato de interventoría no término el 8 de julio de 2019, información que no se encuentra publicada en la citada página, pues consultada la página <https://colombialicita.com/licitacion/107159809>, donde reposan las licitaciones públicas, encontramos la siguiente información, al respecto:

Filtrar por tipo fecha

Filtrar por departamento

Filtrar por plataforma

Rango de Fechas

Rango de Fechas

Fecha Detección

Fecha Detección

Buscar con estos Filtros

Estadísticas Generales

Concursos Recientes

¿Que es esto?

Resúmen del Contrato o Licitación	
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA FLORESTA, Y DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y TÉCNICO RESPECTIVO, UBICADA EN LA COMUNA 12, ADMINISTRADA POR EL INDER DE MEDELLÍN
Cuantía	\$190.693.805
Vigencia	Proceso asignado o cerrado. No se aceptan nuevos aplicantes.
Entidad	ANTIOQUIA - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER MEDELLÍN
Estado	Terminado Anormalmente después de Convocado
Tipo	Concurso de Méritos Abierto
Tipo de Fecha	Fecha de Terminación Anormal
Fecha de Detección	2018-06-06 04:57:13
Cód. Secop 1	18-15-8112918
Número del Proceso	CM-011-18
Fecha	2018-07-17
Última Revisión	2021-01-31
<div>Página Oficial del Proceso16 RelacionadosWeb de la Entidad@INDERMEDELLIN</div>	
Entrada No. 1	
Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto

Sin que de este documento sea posible determinar la fecha de inicio y terminación del contrato, así que teniendo en cuenta que era carga de la prueba de la parte actora, allegar las pruebas de los hechos que sirven de sustento a su pretensión, en virtud de lo preceptuado en los artículos 164 y 167 del CGP en concordancia con el 145 del C.P.T. y de la S.S., disposición que señalan:

“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.” e “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...”

Debe esta Sala concluir que la demandante no cumplió con esas exigencias probatorias, no siendo viable acceder a las pretensiones en los términos requeridos.

Por último, no está de más indicar que si bien la demandante aportó pruebas, como registros fotográficos, videos y el concepto de una ingeniera civil respecto de la obra, de estos documentos no es factible inferir que *LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA JURÍDICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA FLORESTA, Y DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y TÉCNICO RESPECTIVO, UBICADA EN LA COMUNA 12*, al mes de julio de 2019 no había finalizado, pues los registros fotográficos y videos no precisan fecha alguna, quedando entonces acreditado en el plenario que la relación laboral para la cual fue contratada la accionante finiquito el 8 de julio de 2019, como se indica en al acta de reinicio, del que se hizo alusión con antelación.

Conforme a las consideraciones, fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, se confirmará íntegramente la decisión de primer grado.

Costas en esta instancia cargo de la demandante y a favor de la accionada. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000

7. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de junio de 2021, proferida por el JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **DORA ELENA GÓMEZ CORRALES** contra la sociedad **CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S**

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la accionante y a favor de la sociedad demandada. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.160.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **38a2d18c5c2bb96b0e93a596c5f83b7a626baeca1e85a196a7b5767250c8bc69**

Documento generado en 22/06/2023 03:42:26 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>